



RICARDO AGUILAR CUBILLOS.

El espejismo de la austeridad parlamentaria

En los últimos días, un parlamentario de la región de O'Higgins ha protagonizado un nuevo episodio que refleja, con claridad, una práctica cada vez más común en la política nacional: el show mediático por sobre las soluciones reales.

En medio de la indignación ciudadana provocada por el alza en el precio de los combustibles —y en un contexto donde muchas familias ven afectado directamente su presupuesto—, el diputado en cuestión decidió exhibir públicamente su tarjeta de combustible, beneficio otorgado por la Cámara de Diputados para cubrir gastos de movilización asociados a su labor. Acto seguido, anunció que no la utilizaría, que la devolvería y que, en definitiva, renunciaría a este beneficio. A primera vista, el gesto podría parecer un acto de empatía o austeridad. Sin embargo, basta con conocer mínimamente el funcionamiento del gasto parlamentario para entender que estamos frente a una puesta en escena más que a una medida efectiva.

La tarjeta de combustible forma parte de un ítem mayor conocido como gasto operacional —o "gasop", en la jerga interna— que agrupa una serie de recursos destinados al ejercicio de la función parlamentaria. Estos fondos no constituyen un beneficio personal directo, sino un presupuesto asignado para el cumplimiento de labores legislativas y territoriales.

Lo relevante es que, si dichos recursos no se utilizan en combustible, no regresan al Estado ni se redistribuyen ha-

cia áreas como salud, educación o seguridad social. Por el contrario, se reintegran al mismo ítem de gasto operacional del parlamentario, pudiendo ser destinados a otros fines: desde insumos de oficina hasta actividades territoriales, contratación de personal de apoyo o difusión en medios de comunicación.

En otras palabras, la supuesta "renuncia" al uso de combustible no representa ahorro alguno para el Estado, ni un alivio concreto para las arcas públicas. Se trata, más bien, de una reasignación interna de recursos dentro del mismo presupuesto parlamentario.

Presentar esta acción como un gesto de sacrificio o responsabilidad fiscal no solo es impreciso, sino que contribuye a desinformar a la ciudadanía, generando una percepción errónea sobre el impacto real de estas decisiones.

Si el objetivo fuera efectivamente avanzar hacia una mayor austeridad, el camino no pasa por gestos individuales ni anuncios simbólicos, sino por una revisión estructural del gasto parlamentario. Evaluar la pertinencia de los montos asignados, transparentar su uso y, eventualmente, reducirlos de manera institucional podría generar un impacto real y, eventualmente, liberar recursos que sí puedan ser redirigidos a prioridades nacionales.

Lo contrario —este tipo de acciones aisladas— solo alimenta el descrédito de la política, reforzando la idea de que, frente a problemas complejos, se opta por soluciones superficiales. La ciudadanía no necesita gestos. Necesita cambios reales.